

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo por el C. Juan José Quiroz por sí y en representación de los vecinos de San Lorenzo Ixtacoyotla, contra la providencia del subprefecto de Metztitlan, por la cual se adjudicaron al C. Ciriaco Hernandez varios terrenos de los comunes de aquel municipio.

ESCRITO DE DEMANDA.

C. Juez de Distrito.

Juan José Quiroz, ante vd. como mejor proceda y salvas las protestas oportunas, digo:

Primero; que en 29 de Noviembre de 1713, los naturales de los pueblos que formaban la provincia de Metztitlan, compraron en \$ 2500, por via de composicion á D. Francisco de Valenzuela, los terrenos que abrazaba dicha provincia y que tenían en posesion inmemorial.

Segundo; estos terrenos lindaban por el Oriente, con el potrero de Camacho, rancho de los Nogales, tierras de Mexquititlan y de San Bernardo; por el Norte con Achecoquatlan, Chilacatipan y Olotla; por el Poniente con la hacienda de la Florida y por el Sur con terrenos de Huipastla, San Juan Qualquisque y Santa Mónica.

Tercero; entre los pueblos cuyos naturales compraron dichos terrenos, están San Lorenzo Ixtacoyotla, San Guillermo, Flosochitlan, Gilo, Huatula, Sta. María y San Nicolas que formaban el gobierno de San Lorenzo hoy municipalidad de ese nombre al norte de Metztitlan.

Cuarto; Dentro de los linderos mencionados y tambien al Norte de esta cabecera, existen los sitios llamados Mesa del Aguila, Cuatlachapa, Ocotenango, Jopalcatipa, Calaboze, Frontera de Chihuahua y Teca-jatla.

Quinto; hecha la reparticion de los ter-

renos comprados, á los naturales de los pueblos del gobierno de San Lorenzo, tocaron los sitios referidos, los que distribuidos á su vez, tocó á los naturales de San Guillermo una porcion en cada uno de ellos, lo que se separó del resto por linderos que reconocen y respetan los naturales de los pueblos circunvecino.

Sesto; dichos terrenos fueron adquiridos por los compradores en pleno dominio y propiedad. Estaban destinados al uso inmediato de cada uno de estos, pues en ellos sembraban, pastaban sus ganados y se proporcionaban madera, combustibles y otros objetos que producian, *sin reconocer* á nadie, renta, pensión ó prestacion de algun servicio personal, vecinal ó municipal. No reservó ni las mas pequeña fraccion para *propios* del ayuntamiento de San Lorenzo, ni para el concejo de algun pueblo. Los gastos comunes ó municipales se cubrían por medio de contribuciones puramente personales, y con otros arbitrios que en nada afectaban la propiedad de los compradores.

Setimo; dos naturales de San Guillermo, como los de los demas pueblos, se repartieron entre sí principalmente los terrenos de labor; pero los montes y los pastos quedaron proindiviso disfrutándolos todos en comun.

Octavo; por lo expuesto se comprenderá, que estos terrenos, no son tierras de *repartimiento*, porque estas si pertenecen á los propios de algun ayuntamiento ó concejo, y se distribuyen entre los labradores que las necesitan, pagando á la corporacion, renta ó censo, ó prestando algun servicio personal. (Ordenanzas de intendentes, memoria de Lerdo pág. 157).

Noveno; en consecuencia, un natural cualquiera de San Guillermo tenia pleno dominio y propiedad, no solo en la fraccion que le hubiere tocado en las tierra de labor sino en la parte que representaba en los demas terrenos no divididos, y que podia pedir cuando quisiera separarse de la comunion, ejercitando la accion *communi divi-*

dundo, con el mismo derecho de un heredero, con la acción *familia erascunda*, reclama la parte que tiene en la herencia común.

Décimo; este derecho de nuestros antepasados fué trasmitido intacto de padres á hijos y de generacion en generacion hasta nosotros, por una larga serie de sucesiones testadas ó intestadas, en virtud de las cuales los actuales naturales de San Guillermo disfrutamos los terrenos referidos en los mismos términos que nuestros progenitores, libres de todo gravámen, como si los acabáramos de comprar. Y yo tengo el mismo dominio pleno, la misma propiedad absoluta en la parte que represento en las mismas tierras que tenían mi padre, mi abuelo, y demas ascendientes, por que soy natural de San Guillermo, descendiente de los compradores.

Undécimo; este era el estado de las cosas al publicarse la ley de desamortizacion de 25 de Junio de 1856. Como los terrenos que disfrutábamos, jamás se habian dado en arrendamiento, ni en enfiteusis, ni eran *tierras de repartimiento*; como ni el ayuntamiento de San Lorenzo, ni el consejo de algun pueblo, ni corporacion alguna tenia en ellos el menor derecho, pero ni siquiera la administracion; y como por consiguiente no habia inquilinos, colonos censatarios; ni rentas, censos, prestaciones personales, etc., á ninguno de nosotros ocurrió que la expresada ley nos impusiera la obligacion de denunciar nuestras propiedades para que se nos adjudicase en *propiedad* lo que ya era *nuestro* y no podia serlo mas, ni menos imaginamos que podria haber algun ambicioso que nos despojara y nos redujera á la mas espantosa miseria á título de adjudicatario.

Duodécimo; pasaron quince meses despues de dada la ley de 25 de Junio, cuando repentinamente supimos que el 12 de Setiembre de 1857, la subprefectura de Motititlan á nombre del ayuntamiento de San Lorenzo, habia adjudicado en propiedad á

D. Ciriaco Hernandez los expresados sitios, Mesa del Aguila, Cuatlachapa, Ocotenango, Tepalcatipa, Calabozo, Frontera de Ohiluahua y Tecajatlá, pagando á dicha corporacion los réditos correspondientes, cuyo acto realizaba el mas inicuo de los despojos, arrebatándome á mí, á mi familia, á los comuneros de todo el pueblo de San Guillermo y á los de todos los siete pueblos del municipio de San Lorenzo nuestra propiedad y nuestro único patrimonio, á pretesto de cumplirse con la referida ley y á pesar de muchísimas circulares supremas que exceptuaban de dicha disposicion los terrenos de dicha naturaleza, ya porque algunos se comprendian en su art. 8º, ó porque ni su espíritu ni su letra los abrazaba.

Decimotercero; el terror y el espanto se apoderó de todos nosotros individualmente, por que de propietarios nos habian reducido á la miserable condicion de colonos; de labradores libres á la de abyectos proletarios. Desde entonces, no hemos dejado de oponernos, siempre pacíficamente, á la consumacion de semejante atentado, elevando continuas exposiciones á prefectos, subprefectos, gefes políticos, gobernadores etc.; y amparándonos unos en nuestras posesiones y pretendiendo otros privarnos de ellas, dura hasta hoy esta cuestion y durará hasta que se nos atienda en justicia ó se nos haga morir de hambre, de miseria ó de desesperacion.

Decimocuarto; esta sencilla pero verídica relacion de los hechos, convence desde luego que la providencia del subprefecto de Motititlan, no afecta ni remotamente los derechos del ayuntamiento ni del *comun* del pueblo, sino á los de los particulares. Por ella somos yo, mi familia, mis parientes y demas naturales de San Guillermo, los perjudicados. Los individuos y no el comun hemos sido atacados en nuestras posesiones, en nuestros legítimos derechos de propietarios, en nuestras garantías individuales.

Decimoquinto; por fortuna, C. juez, este despojo de mi propiedad, este ataque á mis posesiones se verificó cuando nuestro código fundamental tenia sancionado en sus artículos 16 y 27, que nadie pueda ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito fundado y motivado en causa legal, y que "la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización." Por fortuna, tambien el atentado del subprefecto de Metititlan se cometió despues de establecer nuestro código sublime en su art. 101 frac. 1º, los juicios tutelares de las garantías individuales.

Decimosexto; en esta virtud, á mi propio nombre y prestando voz y caucion por los demas naturales de San Guillermo. Al juzgado suplico se sirva ampararme y protegerme, contra la providencia del subprefecto de Metititlan, que originó al C. Ciriaco Hernandez, á nombre del ayuntamiento de San Lorenzo, los terrenos mencionados, dejando á salvo nuestros derechos para deducirlos contra quien corresponda, por los gravísimos perjuicios que aquella providencia nos ha ocasionado. Protesto la necesario.

Pachuca. Octubre cinco de mil ochocientos setenta y uno.—No sé firmár.

Otro si digo: que la autoridad inmediatamente ejecutora del acto reclamado, es el Presidente municipal de San Lorenzo.

Otro idem: suplico al juzgado se sirva admitir mis ocurso en papel comun, por ser notoriamente pobre. Fecha utsupra.

Alegato del quejoso.

He llegado á entender, que es tanta la ampliacion que se quiere dar á la ley de desamortizacion de 25 de Junio, que no faltan personas que no pudiendo por sí ni por mano ajena levantar cabeza y hacerse de capital; proyectan denunciar los ranchos

que los indígenas tienen llamados de *comunidad* ó *cofradía*, para hacerse de ellas con todos sus llenos.

¿Y será justo que se presente un D. Guindo Cerezo, y se siente á comer á boca llena en la mesa que por varios siglos han preparado y cubierto de manjares estos indígenas, cuyos mayores les plantaron?

Cuando quiera dejárselos sin accion para formar ó tener compañía, que ellos entre sí se repartan entre todos los vecinos del pueblo lo que resulta haber como una herencia de sus mayores y como árbitros de tal herencia.

(Preamble á la suprema resolucion del ministerio de Hacienda núm. 134 de 20 de Diciembre de 1856. Véase en la memoria de Lerdo.)

Muy injusto es, en efecto, C. juez, que un D. Ciriaco Hernandez, abusando de nuestra ignorancia y desamparo, é interpretando fatidicamente la ley misma que lo dictó para proteger á la clase proletaria, se haya apoderado de los terrenos que nuestros mayores adquirieron con el sudor de su frente, *con el miserable peculio de todos y cada uno*, y que nos transmitieron como una herencia, para subvenir á nuestras mas apremiantes necesidades. Pero..... la justicia federal nos tomará bajo su proteccion. Abrigo la firme esperanza de que los ilustrados é íntegros jueces que han de conocer de este negocio, nos devolverán lo que la codicia y la arbitrariedad nos arrebató. Con esta confianza, entro ya al examen de las pruebas que fundan el derecho que reclamo.

Un pueblo no es un ayuntamiento como el Estado no es su congreso. Por este motivo, los bienes de la corporacion municipal no aprovechan directamente á los vecinos de los pueblos, ni los intereses de estos constituyen el fondo municipal. Los ayuntamientos subsisten de sus "propios y arbitrios;" los pueblos, de la riqueza individual y del patrimonio de los vecinos, ya consista en bienes individuales ó en bienes

comunes. Hay entre estos bienes y aquellos, muy grandes diferencias.

Sucedía á veces, que moría algun rico propietario, dueño de una grande extension de tierra, sin dejar herederos, é instituía por tales á los vecinos de un pueblo. Otras ocasiones, los mismos vecinos, para librarse de un colindante discolo ó insufrible, determinaban comprarla sus posesiones, reuniendo entro todos su valor. Se aumentaban las familias de una ranchería, y esta se origia en pueblo; el hacendado, por liberalidad ó al precio correspondiente, cedía á los vecinos en comun los terrenos que necesitaban. Los mismos soberanos para obligar á los indígenas á vivir en poblado, les hacian merced de terrenos para que los disfrutaran como dueños sin el menor gravámen. Las mas veces los naturales de un pueblo con su propio peculio y no con el fondo comun ó municipal, compraron á los compositores de tierras de quienes hablan las leyes de Indias, las que necesitaban para sus propios usos. Como en estos y otros casos semejantes los vecinos no se repartian los terrenos que adquirian por convenirles mas disfrutarlos en comun, los conservaron con este carácter hasta nuestros dias, y por esta razon se les llama terrenos *comunes ó comunales.*

Los ayuntamientos por su parte, poseen algunos terrenos cuyas rentas sirven para atender á los gastos de la corporacion y para obras de utilidad pública. Estos no son, como los anteriores, poseidos y disfrutados sin gravámen alguno ni por cualquiera vecino indistintamente, sino que la corporacion los administra dándoles en arrendamiento, á censo enfitéutico, en usufructo, etc, con obligacion por parte de los poseedores, de pagar al fondo municipal renta ó censo; de prestar algunos servicios personales; de pagar ciertas obenciones ó de reconocer en fin cualquiera gravámen en favor del municipio.

Son pues cosas bien distintas los terrenos municipales ó propios del ayuntamien-

to y los terrenos comunes de los pueblos. Y esta diferencia es tal; que no pocas veces se ha visto á los ayuntamientos litigando contra los pueblos sobre bienes de una ó otra clase. Ninguna ley hasta ahora, ha confundido en una misma naturaleza los terrenos mencionados; y los de desamortizacion principalmente, tuvieron especial cuidado de no confundirlos en una disposicion general, siendo no solo diversas sino hasta contrarias, como se verá mas adelante, las reglas á que se les sujeta.

Para determinar con mas precision cuales son realmente los terrenos comunales de los pueblos y distinguirlos de aquellos que aunque disfrutados por los vecinos, son propiamente municipales y pertenecen á los ayuntamientos, creo conveniente estender me sobre esta materia.

Sabido es, que en los pueblos hay tres clases de terrenos. La primera, comprende á los que en cuanto á la propiedad pertenecen al comun ó consejo, y en cuanto al uso á todos y á cada uno de los vecinos, como las fuentes, los montes, los egidos y demas, destinados esclusivamente al uso público de las poblaciones, (ley 9 tit. 28 part. 3ª, art. 8º; al fin de la ley de 25 de Junio de 1856 y suprema resolucion de 20 de Agosto del mismo año. Eseriche Dic de leg. art. "bien es consejales" en su primera acepcion.)

La segunda, abraza á los que forman el patrimonio del pueblo y no puede disfrutarlos cada vecino en particular, sino que sus productos sirven para objetos de utilidad comun, como para reparar puentes, caminos, calzadas etc. y se administran por el ayuntamiento ó por una junta especial (ley 10 tit. y part. cit., Eseriche "bienes consejales" en su segunda acepcion.)

La tercera, la forman los que adquirieron los vecinos de un pueblo, como compañía parcial y les corresponde por derechos de dominio y se hallan proindiviso. En estos, el todo pertenece á cada uno de los conductos ó comuneros y á todos juntos, y no solo

tienen la *propiedad* sino el *uso* de ellos (Escribo dic. de leg art. "bienes comunes" en su segunda acepción.)

El autor citado, comprende á las dos primeras especies bajo la sola denominación de "bienes conseejales;" pero desde luego se comprende, que los de la primera clase son *bienes públicos* y los de la segunda "propios" del comun ó municipales.

Las de la tercera especie son realmente los terrenos comunes.

Ahora bien; los terrenos adjudicados á D. Ciríaco Hernandez en Setiembre de 1857, nunca han sido *ranchos propios* ó terrenos municipales. Son y han sido siempre *terrenos comunes* de los vecinos de los pueblos. Ni la menor constancia existe de que pertenecieran al ayuntamiento de San Lorenzo. Se pidió informe al C. presidente municipal, al jefe político de Metztitlan y al gobierno del Estado de México; se examinaron varias personas caracterizadas, y ni un solo indicio revelan sus contestaciones; para afirmar lo contrario, Verdad es que el extravío de algunos archivos y el desorden en que se hallan otros, no permitieron recoger con precisión las noticias que pedí sobre el particular; mas yo protesto solemnemente, que ni en los cortes de caja de la tesorería del ayuntamiento, ni en las cuentas de ingresos al fondo municipal existe una sola partida de productos por rentas de *propios*. Otras veces he dicho y lo repito ahora con la mejor buena fé, que los gastos municipales se han cubierto siempre con una contribucion puramente personal, y así lo dijo el presidente municipal.

Pero si nada indica que los terrenos adjudicados eran municipales, abundan las pruebas para asegurar que son comunes de los naturales de los pueblos. Así lo dijo el presidente municipal en su informe (fojas 8 á 10 del cuaderno principal); así lo declaró el mismo ayuntamiento de 1857 que inició la adjudicación (fojas 26 cuaderno 1º de pruebas); y lo mismo confiesan las personas que formaron aquella corporación y

los que la componen actualmente (fojas 32 á 44, cuaderno 1º de pruebas.) En una palabra, lo mismo han sostenido enérgicamente los representantes pasados y presentes del municipio; los encargados de defender sus derechos; los agentes de la parte á quien favoreció la adjudicación de que se trata, supuesto que al ayuntamiento y no á los vecinos se mandó pagar los réditos del precio de los terrenos. De otra manera ¿podría concebirse que la corporación municipal hubiera rehusado constantemente recibir los mencionados réditos? ¿podría imaginarse que los representantes de la misma corporación hiciesen una confesion tan explícita en contra de sus propios intereses, quedando obligada á responder á los vecinos y aun al mismo adjudicatario de los perjuicios que haya ocasionado una venta tan ilegal y atentatoria?

Si los testimonios y documentos alegados no fuesen aun bastantes á mi intento, hay todavía otras pruebas irrefragables: los títulos que he presentado y forman el segundo cuaderno de pruebas. Ciertó es que son una copia incompleta y no autorizada de los originales; pero su antigüedad y la circunstancia de estar en papel sellado de una época muy anterior á la en que se verificó el remate, alejan de ellas toda sospecha. Desgraciadamente no se encontraron en el archivo general los originales; pero esto no prueba que no hayan existido, sino que el expresado archivo aun no está completamente arreglado para haberlos encontrado oportunamente, como lo declara el inteligente empleado que lo tiene á su cargo; sin embargo de que á mi juicio son alguno de los que menciona, ya los que Metztitlan siguió con Luzon y Ahumada, ó los que se refieren á composiciones de tierras, pues ambos negocios son el objeto del manuscrito.

De este resulta principalmente: 1º; que los naturales de los pueblos que formaban el gobierno de Metztitlan, siempre han estado en posesion de las tierras de su com-

prehension; manejándolas como *suyas propias* (fojas 2 vuelta, 19 frente y vuelta, 21 vuelta, 132 vuelta y siguientes); 2º; que los terrenos de dicho gobierno, abrazaban los que existen desde *Hualula* hasta *Ixtacoyotla* (fojas 4 vuelta) hoy municipio de este nombre, y sus linderos se determinan desde fojas 34 vuelta hasta 43 frente, dentro de los cuales están comprendidos los pueblos de San Guillermo y demas y los terrenos adjudicados; segun resulta de la informacion de fojas 32 y siguientes del cuaderno 1º de pruebas; 3º, que en toda la comprehension de Metztitlan no habia mas haciendas que las de particulares, y que *todo lo demas* lo disfrutaban y poseian los naturales (fojas 9 vuelta); 4º, que si alguna vez tuvieron estos una fraccion de los terrenos arrendados, fué contra su voluntad, (fojas 47) y aun en este caso las rentas no ingresaban al fondo comun sino que se distribuian á los mismos vecinos, con las que algunas veces pagaban los tributos reales, (fojas 63 vuelta, 88 y 93); 5º que la *comunidad* de Metztitlan no tenia bienes propios (fojas 88), porque las tierras se disfrutaban por los naturales no como *pueblos ó corporacion* sino porque eran *suyos* (fojas 124 frente y vuelta), y 6º, que en 29 de Noviembre de 1713 D. Francisco Venezuela Venegas, juez privativo de composiciones de tierras, vendió á los naturales de los pueblos de Metztitlan los terrenos comprendidos en los linderos designados, en dos mil y quinientos pesos para sus *labores, siembras y crianzas*, es decir, para sus usos particulares (pág. 65.)

Aun hay mas. La informacion (fojas 5 á 16 del primer cuaderno de pruebas) que en 1862 levantó el subprefecto de Metztitlan, comisionado por la prefectura de Huejutla sobre la clase de terrenos comprendidos en la adjudicacion, viene á quitar hasta el escrúpulo que pudiera haber sobre la exactitud de la proposicion que estoy demostrando. Ruego encarreadamente á esé juzgado y á los dignos magistrados de la Suprema

Corte, detengan un poco mas su atencion en cada uno de los hechos que se procuró hacer constar en ella porque son muy interesantes para la claridad de este negocio. Aparece de dicha informacion, que los terrenos adjudicados jamas han reconocido renta, pension, &c; que los vecinos de los pueblos se han servido constantemente de ellos para pastos de sus animales, para sus labores y para sus habitaciones (fojas 5 vuelta); que la reunion de personas que se presentaron á defender la propiedad de ellos, fué muy numerosa y concurrida hasta de los muchachos (fojas 7 vuelta); que son ocho los pueblos que se sirven de ellos, así en sus pastos como en sus labores; que siempre los han tenido en pacífica posesion; que los perjuicios que se siguen á los vecinos con la adjudicacion son tan graves, que los obligarian á emigrar; que por cuenta de todos se han hecho muchas mejoras en dichos terrenos; que hay en estos varios ranchos y casas de propiedad particular y de las que han sido lanzados los dueños (fojas 8); que dichos terrenos jamas han estado arrendados ni los vecinos han consentido en que se arrendasen alguna vez, todo lo que sostuvieron en presencia del adjudicatario, quien confesó la verdad de lo expuesto (fojas 8 vuelta y 15 vuelta); y que la posesion que se dió al adjudicatario fué protestada por los vecinos y autoridades (fojas 12 vuelta.)

Verdad es que el adjudicatario hizo creer que los terrenos estaban arrendados; pero tambien lo es que su dicho fué desmentido por los vecinos todos y hasta por él mismo, patentizando con esto la superchería con que se manejó para sorprender al subprefecto y arrancarle la escritura de adjudicacion. Si se hubieran recibido todas las pruebas que promoví, estoy seguro que hubieran venido á corroborar poderosamente mis asertos.

La resistencia del Lic. Hernandez, heredero y albacea del adjudicatario, en presentar la escritura de remate que se le pi-

dió (fojas 63 cuaderno 1º de pruebas), es un argumento mas de la mala fé conque se obró en este negocio y de las irregularidades que contiene en nuestro perjuicio.

Por último, C. juez, los poseedores de una cosa siempre se presumen dueños, mientras no se demuestra lo contrario, (Escribiche en su Diccionario, artículo «propiedad.») Los naturales de los pueblos, segun consta de autos, han estado desde tiempo inmemorial en quieta y pacífica posesion de los terrenos adjudicados, y hasta hoy, no digo una prueba, pero ni la voz misma del adjudicatario, se ha levantado para asegurar que son terrenos municipales.

Probado como está que los bienes adjudicados son comunes de los vecinos; teniendo en toda comunion de bienes, todos y cada uno de los comuneros ó condueños el pleno dominio y propiedad (leyes 47, tít. 28, part. 3ª y 6ª tít. 10, part. 5ª, Sala, libro 2º; tít. 15 párrafo 9 y Escribiche en el lugar citado); y siendo yo como he probado, uno de aquellos vecinos, fácilmente se comprenderá, porque he alegado como fundamento de mi queja, que se violó en mi persona la garantía de la propiedad que asegura el art. 27 de la carta fundamental. El adjudicatario se apoderó de los terrenos de los naturales de San Guillermo y con ellos me arrebató la parte que represento en la comunion. Esta parte es exclusivamente mia y en esto consiste mi propiedad.

No porque mis derechos de propietario esten mas ó menos confusos, mas ó menos indeterminados, son menos ciertos y menos protegidos por el pacto federal. Mañana que yo quiera, con la accion *communis dividundo* y el derecho que me da la ley 11 tít. 10, part. 5ª, ó cuando las autoridades cumpliendo con las leyes de reforma de que hablaré despues, dispongan la division de los terrenos comunes, puedo reclamar la parte que me corresponde. Pero si el adjudicatario se ha llevado el todo ¿no se apoderó tambien de mi parte?

No se diga que las leyes de desamortiza-

cion vinieron á despojar á los vecinos de un pueblo, de la propiedad que tienen en sus terrenos comunes. No; tanto ellas como las ejecutorias de los tribunales federales, la han defendido enérgicamente contra los ataques de los ambiciosos. Las leyes de reforma, separando cuidadosamente los *propios* de los ayuntamientos y los *públicos* de las poblaciones de los *terrenos comunales*, han declarado á estos exentos de la adjudicacion, mandándose repartir entre los comuneros, conciliando de este modo el derecho de propiedad con la necesidad de extinguir los terrenos de comunidad. Todo lo que se comprende fácilmente, consultando las siguientes disposiciones mas importantes.

Sobre terrenos de pueblos que por tenerlos arrendados los vecinos, ingresando sus productos al fondo municipal, ó porque los mismos vecinos los disfrutaban pagando al municipio ciertas obenciones, servicios personales etc., son reputados propios de corporacion y comprendidos en la adjudicacion de la ley de 25 de Junio;

Núm. 11 de 26 de Agosto de 1856.

Núm. 13 de 29 de Agosto de 1856.

„ 35 „ 17 „	Sbre.	„
„ 116 „ 28 „	Nbre.	„
„ 127 „ 18 „	Dbre.	„
„ 128 „ 19 „	id.	„
„ 135 „ 24 „	id.	„

Sobre tierras de repartimiento y demas, pertenecientes á corporacion, cuyo valor no exceda de 200 pesos, en que se dispone que los poseedores las pueden adjudicar, sin pagar alcabala ni otro derecho y sin otorgarse escritura pública; y que para que los poseedores pierdan el derecho á ser preferidos á la adjudicacion, es indispensable que lo renuncien expresamente haciéndose así constar en la escritura que se tire á favor de los denunciante.

Núm. 66 de 9 de Octubre de 1856.

„ 76 „ 17 „	id.	„
„ 79 „ 21 „	id.	„
„ 89 „ 4 „	Noviembre.	„
„ 90 „ 7 „	„	„

Núm. 92 de 8 de Noviembre de 1856.

„ 110 „ 24 „ „ „ „ „

Sobre terrenos públicos exceptuados de la desamortización.

Art. 8º al fin de la ley de 25 de Junio de 1856.

Núm. 9 suprema resolución de 20 de Agosto de 1856.

Sobre terrenos que los naturales de los pueblos poseen sin gravámen pero sin título legal, por lo que se consideran como valdíos y están sujetos á reglas muy diversas de las de desamortización, sin embargo de que la ignorancia de muchas autoridades los ha confundido con las relativas á terrenos comunes

Ley de 20 de Julio de 1863.

Circular de 30 de Setiembre de 1867.

Id. de 10 de Julio de 1868.

Id. „ 27 „ id. „

Sobre terrenos que por haberlos adquirido los vecinos en propiedad con justo título y estarlos disfrutando por sí mismos sin tenerlos arrendados y sin reconocer al municipio gravámen alguno, son reputados propiedad de particulares y se manda repartirlos, exceptuándolos de la desamortización.

Suprema resolución nº 57 de 17 de Setiembre de 1856.

Id. „ 94 11 de Nbre. „ id.

Id. „ 99 13 de id. „ id.

Id. „ 129 20 de Dbre. „ id.

Id. „ 142 2 de Enero „ id.

Suprema resolución nº 161 de 5 de Setiembre de 1859.

Id. „ 173 „ 29 de Abril de 1861.

Id. „ 185 „ 14 de Obro. de 1862.

Id. „ „ 10 de Dbre. de 1862.

Las anteriores disposiciones se encuentran publicadas en el tomo 1º parte 1ª del nuevo código de reforma del Lic. Blas Gutiérrez, menos la última, correspondiente al 10 de Diciembre de 1862 que ha visto casualmentb inserta en el tomo 2º de decretos del gobierno de Jalisco sobre terre-

nos de indígenas y que por su importancia decisiva pongo á continuación.

Número 339.—Terrenos comunes.—No están comprendidos en la adjudicación de que trata la ley de 25 de Junio de 1856.

Por ser poco conocida la siguiente resolución y habiendo en el Estado algunos casos análogos, se publica por disposición del C. gobernador:

“Ministerio de Hacienda y crédito público.”

Sección de desamortización.—Dada cuenta al C. presidente constitucional de la República, con el oficio que dirigió vd. á esta secretaría, fechado el 16 de Setiembre último, acompañando, informada favorablemente por el ayuntamiento de Huautla de ese Distrito, la solicitud de los vecinos del municipio, pidiendo que los *terrenos comunes* de la municipalidad, así como los que han comprado como *compañía parcial* y no con el dinero del fondo, se declaren no comprendidos en la adjudicación que de ellos se hizo en virtud de la ley de 25 de Junio de 1856, como ya se ha declarado respecto de los terrenos también *comunes* que disfrutaban proindiviso los vecinos de las municipalidades de Tlaxiaco (Yahualica y se vé á fojas 71 del primer cuaderno de pruebas) y Hachingo (Huazalingo, es la citada antes con el núm. 173;) el propio C. presidente en vista de las razones que se exponen en el asunto de que se trata, y considerando que la maliciosa interpretación, que se dá en algunos casos á la ley Lerdo, la convierte en una medida tiránica de despojo y destrucción, contraria enteramente á la esencia de su espíritu que es repartir lo mas posible la propiedad raíz para difundir la riqueza y destruir el monopolio que por tanto tiempo ha sido el elemento fomentador de las desgracias de la República, ha tenido á bien acordar de conformidad dicha solicitud, pues el supremo gobierno, al sostener y desarrollar la reforma, ha querido mejorar la condición desgraciada del pueblo industrial y trabajador, y muy especial-

mente la de la raza indígena que le merece toda su simpatía, como digna de mejor suerte. En consecuencia, se procederá á expedir individualmente á los expresados vecinos los títulos de *propiedad* respectivos, sin quedar obligados á obenciones ni reconocimientos de especie alguna, pagando únicamente á su vez y en su casa, las contribuciones generales y municipales, como los demas habitantes de la República, *pues si por una equivocacion, bien lamentable y por falsa aplicacion de la ley ha habido adjudicacion de tales terrenos, estas no pueden llevarse adelante, reponiéndose las cosas absolutamente al estado que guardaban cuando se hicieron aquellas, devolviéndose por las administraciones de rentas lo que por ellas hubieran percibido y procediéndose, segun se expresa, al repartimiento en los términos que las leyes previenen y conforme á esta suprema disposicion.*

Lo digo á vd. para su inteligencia y en contestacion á su oficio citado; en el concepto de que se trascribe esta comunicacion á los vecinos de Huautla y al ayuntamiento de aquella municipalidad.

Libertad y reforma. México, Diciembre diez de mil ochocientos sesenta y dos.—*Núñez.*—C. prefecto de Huejutla.—Es copia del original.

México, Diciembre diez de mil ochocientos sesenta y dos.—*José Antonio Gamboa.* (El "País.")

En cuanto á ejecutorias que han protegido la propiedad de los vecinos en sus terrenos comunes, solo citaré, para abreviar, las que tienen una exacta conexión al caso presente.

En 15 de Diciembre de 1869 la Suprema Corte amparó á los vecinos del antiguo presidio de Mazatlan, hoy Villa de la Union, contra una suprema disposicion que adjudicó á algunos denunciantes los terrenos comunes reputándolos de propiedad nacional. Todos los considerandos de esta sententencia tienen la mas exacta aplicacion

al caso presente, concluyendo su parte resolutiva con las siguientes palabras:

"Segundo; la justicia de la Union ampara y protege á dichos vecinos y ayuntamiento contra la resolucion últimamente citada, por haberse con esta *violando en ellos* la garantía que otorga el art. 27 (el que protege á la propiedad) de la citada Constitucion. (Diario oficial del supremo gobierno núm. 357 año de 1869.)

En 4 de Setiembre último, la misma Corte amparó á uno de los vecinos de San Juan del Mezquital contra una providencia del ayuntamiento que adjudicó á uno de tantos ambiciosos un terreno que poseia de los *comunes* de dicho pueblo. Se fundó el fallo en que se violó el art. 27 constitucional que garantiza la propiedad de los individuos, la cual, segun el último considerando, aparecia justificada con los títulos en virtud de los cuales vienen conservando separadamente la tenencia como *propiedad particular* por mas de un siglo los *vecinos referidos*, entre los que aparece el quejoso (Semanario Judicial de la Federacion, segunda parte página 293.)

En 26 del mismo mes y año, la propia Corte amparó á los vecinos de San Bernabé Tenoxtitla por habérseles atacado su propiedad en los *terrenos comunes*. Terminan los considerandos con estas notable-palabras: *puesto que conforme á las leyes de reforma si los pueblos no pueden tener bienes raices en comun, los terrenos que antes tenian como fundo legal deben dividirse entre individuos particulares.* (Sem. jud. part. 2ª pág. 342.)

Efectivamente. Las leyes podrian determinar que la propiedad no se disfrutase mas en comun; pero jamas autorizar la expropiacion de la que corresponde á mas de diez mil vecinos de los pueblos de la municipalidad de San Lorenzo Ixtacoyotla, para monopolizarla y enriquecer á un solo individuo. Repártanse en buena hora nuestros terrenos; pero no se nos arrebató para dejarnos en la mas espantosa miseria.

Cuanto se ha dicho se funda en el supuesto de que mi propiedad en los terrenos adjudicados, esté tan confusa que no pueda designar como mía alguna fracción determinada. Pero apareciendo de autos (fojas 8, 32, y siguientes, cuaderno 1º de pruebas), que los vecinos de mi pueblo tienen partes señaladas en los terrenos susodichos; que tenemos en ellos, todos, labores; algunos, casas; otros, potreros, y varios ranchos de labor ó de ganados; constando que estas posesiones individuales, están en continuo movimiento pasando de unos á otros, vecinos ó extraños, por rentas, cambios, sucesiones &c. (fojas 12, cuaderno primero;) apareciendo, digo, que la propiedad ni está estancada ni proindiviso, supuesto que solo permanecen comunes los egidos, las aguas corrientes, los montes de uso público que están exentos de la desamortización según las disposiciones citadas poco ha ¿podrá dudarse todavía que la adjudicación que se hizo á D. Ciriaco Hernandez no atacó directamente una propiedad exclusivamente mía? En lo que disfruto separadamente de los demas ¿hay siquiera sombra de comunidad ó corporación? Los cercados, el rompimiento de terrenos y otras mejoras, hechas por individuos para sus usos particulares, no representan una propiedad personalísima de la que ni los demas vecinos pueden disponer? Y si no es esta la propiedad que garantiza la constitución en su artículo 27, ¿cual otra puede imaginarse? El hecho de haberme presentado solo, por mi mismo, sin previo consentimiento de los demas vecinos, á reclamar contra una providencia que me arrebató mis posesiones en lo que está destruido, y mis derechos de comunero, en lo que está proindiviso todavía ¿no es una prueba palpitante de que he sentido un agravio personal que nada importa al ayuntamiento ó al comun? Se vé por lo expuesto con cuanta injusticia se privó de sus propiedades á los vecinos de San Guillermo y á los de los demas pueblos. Pero

la arbitrariedad y mala fé se hacen mas notables si se reflexionan dos cosas.

Primera; si los terrenos en cuestion pertenecian á los propios del ayuntamiento, los vecinos serian entonces arrendatarios, usufructuarios, &c; y no pasando, como no pasa de doscientos pesos lo que cada uno posee individualmente, jamas debieron adjudicarse al denunciante, sin hacerse constar en la escritura que se hizo á su favor la renuncia expresa de cada uno de nosotros á la adjudicación, y de que fuimos bien impuestos de las leyes que se dictaron para los indígenas, labradores pobres y demas necesitados, como lo previnieron la circular de 9 de Octubre de 1856 y sus concordantes citadas anteriormente.

Segundo; si dichos terrenos estaban arrendados al adjudicatario, como falsamente lo aseguró, siendo los vecinos los verdaderos dueños de ellos, jamas debió ordenarse, como se ordenó, que los réditos de su valor se pagaran al ayuntamiento, sino á los mismos dueños, según el precepto de la ley de 25 de Junio, aclarada sobre este particular por la suprema resolución número 35 de 17 de Setiembre de 1856, al fin. Cuán grande no se consideraria la injusticia cometida con nosotros, pues no se atravió el mismo ayuntamiento agraciado con los réditos del valor de nuestros terrenos, á recibirlos del adjudicatario, (fs. 12. vta. cuaderno primero:)

Solo me falta desvanecer tres dificultades que pueden ofrecerse para que se conceda el amparo. La primera tiene su origen en la contestación que el albacea de la testamentaria del adjudicatario dió al pedirse la escritura del remate, asegurando que en el juzgado de Distrito de Toluca se habia promovido el mismo recurso y que no obtuvimos. Esto es completamente falso; y el juzgado puede, para convencerse de ello, pedir informes sobre este particular al ciudadano juez de Distrito de Toluca, al tribunal de Circuito de México ó á la Suprema Corte. Y aun suponiendo tal cosa,

no sería yo, por sí, ni por apoderado, quien hubiera interpuesto este recurso, cuyo resultado favorable ó adverso no me privaba del derecho de promoverlo hoy por mi propia cuenta. La segunda dificultad procede del principio que alguna vez se ha alegado de que el recurso de amparo no procede, cuando la parte agraviada puede hacer valer sus derechos ante los tribunales comunes. Afortunadamente, la Suprema Corte condenó enérgicamente ese absurdo constitucional, declarándolo tal, porque la constitucion al señalar los casos para que ofrece el remedio, nada espresa que puede fundar limitacion tan importante, y tal, que haria ilusoria la concesion del recurso, y sosteniendo que para la legitimidad de este y su oportunidad en todo momento, basta la violacion de una de las garantías que la misma constitucion declara como inviolables. (Ejecutoria, de 10 de Agosto de 1869. publicada en el Periódico Oficial del mismo año número 232.) La tercera objeccion nace de la circunstancia de haberse verificado el acto contra el que reclamo, en una época en que no estaban reglamentados los juicios de amparo; pero esta dificultad se desvanecce con las mismas palabras del tribunal de la nacion, citadas poco há: «para la legitimidad del recurso y su oportunidad en todo tiempo, basta la violacion de cualquiera de las garantías que la constitucion declara inviolables.» Desde el 5 de Febrero de 1857, la propiedad quedó bajo la proteccion del pacto federal y en 12 de Setiembre del mismo año, no pudo ya atacarse impunemente, arrebatándonos lo nuestro para favorecer á otro, porque el artículo 27 de la constitucion vela constantemente por ella.

He concluido, ciudadano juez. Si he sido muy difuso, el temor de un porvenir lleno de miserias me disculpará. Fijas están en vosotros, ciudadanos juez y Magistrados, las miradas de mas de diez mil pobres, indígenas la mayor parte, esperando de vuestra sabiduria é integridad una sentencia de

vida ó de muerte. Por mi propio derecho y á nombre de los demas vecinos de San Guillermo, Santa Maria, etc. de la municipalidad de San Lorenzo por quienes presto voz y caucion:

Suplico á ese juzgado y á la Corte Suprema se sirvan ampararnos contra el inícuo acto que nos ha sepultado en un abismo de sufrimientos. Protesto lo necesario.

Pachuca, Marzo dos de mil ochocientos setenta y dos.—*Juan José Quiroz.*

Es copia que certifico. Pachuca, Marzo, cinco de mil ochocientos setenta y dos.—*F. Briseño secretario.*

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Juan José Quiroz, su estado supuesto que es el de alegar de buena prueba, dice: que la justicia federal le debe amparar y proteger contra la providencia del subprefecto de Metztitlan, que le enagenó los terrenos, por ser así de justicia, como procurará demostrarlo.

En 5 de Setiembre de 1857 el ayuntamiento de Metztitlan adjudicó á D. Ciriaco Hernandez los terrenos conocidos por Mesa del Aguila, frontera de Chihuahua, Calabozo y otros, de la propiedad de los vecinos de San Lorenzo Istacoyotla, San Guillermo, Elcochitla, Hualula, Gilo, Santa Maria y San Nicolas, (cuaderno de prueba, número 1. foja 7. vta.)

El 8 de Abril de 1861, se elevó una solicitud á la prefectura respectiva, haciéndole presente el vicio que habia procedido al acto de la adjudicacion respecto á los progonos; y además, que los terrenos adjudicados á D. Ciriaco Hernandez, eran de los exceptuados por la ley de 25 de Junio de 1856, pues que jamás habian pertenecido á corporacion alguna municipal ni se habia dado en arrendamiento, habiendo sido por

lo mismo libros de toda obligacion y pertenecientes al patrimonio particular de cada vecino, lo que se corrobora con la contestacion que el mismo Hernandez dió á los ciudadanos que le preguntaron, desde qué tiempo poseia los terrenos, y á la que contestó que los poseia por mas de treinta años *pero como uno de tantos vecinos, porque toda la comunidad habia estado mancomunada, constándole que á la vez toda hijo de vecino disfrutaba de las mismas garantías,* (fojas 15 del propio cuaderno.)

Con objeto de apoyar mejor los hechos que anteceden, esta promotoria examinó la informacion que dió al prefecto de Metztitlan el H. Ayuntamiento de la municipalidad de San Lorenzo, cuya copia corre á fojas 26, 27, 28, del primer cuaderno de prueba; y de su contesto, se saca en sustancia, que por la escasez de fondos municipales y la urgencia de los acreedores, reunida la corporacion acordó, se convocara á los vecinos á fin de hacerles saber el deficiente de doscientos cuarenta y nueve pesos cinco reales, (\$ 249 5 reales,) que el fondo público debia, y como no alcanzan el arbitrio que se le habia aprobado, la propia corporacion creyó de su deber reunir á los naturales de San Lorenzo y demás pueblos para subsanar esa dificultad, proponiéndoles que ó cubrian el deficiente ó consentian en que se arrendasen los terrenos, proposicion que desecharon por su inconveniencia y demas razones que se alegaron.

Esto bastaria para su intento, supuesto que de lo referido se conoce la verdad de los hechos; pero añadirá por conclusion, que las declaraciones de los ciudadanos que han depuesto y que en la mayor parte son de los que en aquella época componian el ayuntamiento de cincuenta y siete, están contestes y de ellas se infiere, que los terrenos llamados Mesa del Aguila, Cuatlachapa, Ocotenango, Tepalcatica, Calabozo, Frontera de Chihuahua, y Tejacatla; han pertenecido al pleno dominio y propiedad de los naturales de San Lorenzo Istacoyo-

tla, San Guillermo, Elcochitlan, Hualula, Gilo, Santa María, y San Nicolas, libres de todo gravámen y sin haber reconocido jamas en favor de algun pueblo, de algun comun ó corporacion, rentas como servicio personal, ó cosa semejante.

Las mismas declaraciones y sobre todo de la que dió el C. Rafael Perez, á fojas 70 del expresado cuaderno de prueba, se deduce hasta la evidencia, que al adjudicarse los terrenos el C. Ciriaco Hernandez, se hizo bajo la falsa creencia de que pertenecian ó eran del ayuntamiento.

En virtud de lo expuesto, y teniendo presentes las ejecutorias que en distintas épocas han protegido la propiedad de los indígenas, en terrenos comunes, así como tambien la suprema orden de 10 de Diciembre del año de 1862, el promotor opina, que el acto de la autoridad política de Metztitlan por el cual se pusieron en pública subasta los terrenos litigiosos, es atentatorio de las garantías que otorga el artículo 27 constitucional, y por lo mismo concluye pidiendo á la justicia de la union amparo y proteja al C. Juan José Quiroz.

Pachuca, Marzo cuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Mayo ocho de mil ochocientos setenta y dos.—*E. Briseño.*

Sentencia del C. Juez 2º de Distrito.

Pachuca, Marzo trece de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Juan José Quiroz, por sí, y prestando voz y caucion por los vecinos de San Lorenzo Ixtacoyotla, pidiendo amparo de garantías contra la providencia del subprefecto de Metztitlan, por la cual se adjudicaron al C. Ciriaco Hernandez, los terrenos llamados, Mesa del Aguila, Cuatlachapa, Ocotenango, Tepalcatica, Calabozo, Frontera de Chihuahua y Tejacatla, de los

comunes de dicho municipio; vistas las pruebas rendidas, lo alegado por el promovente y por el C. fiscal; y

Considerando:

Primero; que de autos consta suficientemente, que en 12 de Setiembre de 1857 el subprefecto de Metztitlan adjudicó al expresado Hernandez, los mencionados terrenos con arreglo á la ley de desamortizacion de 25 de Junio de 1856, por haberlos reputado como propios del ayuntamiento, segun los informes que le fueron dados por la corporacion municipal y el adjudicatario:

Segundo; que el C. Quiroz ha acreditado plenamente con varios testimonios y documentos, que forman los dos cuadernos de prueba, y principalmente con las expresas y terminantes confesiones de la propia corporacion municipal y del adjudicatario, que los terrenos en cuestion jamás han tenido el caracter que se supone, sino que siempre han sido propiedad de los vecinos, habiéndolos comprado con dinero efectivo para sus usos personales disfrutándolos por si mismos, sin arrendarlos y sin reconocer á favor de los fondos municipales, renta, censo, ni algun otro gravamen;

Tercero; que el quejoso comprobó igualmente ser vecino de aquel municipio y uno de los dueños de los terrenos adjudicados en los cuales tiene sus tierras de labor, apacenta sus animales y se aprovecha de otros productos naturales é industriales, en lo que consiste su único patrimonio.

Cuarto; que la adjudicacion de los terrenos de que se trata, no fué consentida por los vecinos, ni estos han sido indemnizados, supuesto que los réditos correspondientes al valor de los terrenos fueron asignados al municipio sin tener este el menor derecho á aquellos, lo que constituye una flagrante violacion del art. 27 de la Constitucion general.

Quinto; que la providencia reclamada no puede sostenerse como arreglada á la citada ley de 25 de Junio, por que esta se refiere á bienes de corporacion y no á los de parti-

culares, aun que estén de comun y proindiviso cuya circunstancia, si bien modifica la propiedad no la destruye, siendo esta la causa por la que se han dictado varias supremas resoluciones como son la de 17 de Setiembre de 1856, la de 2 de Enero de 1857 la de 29 de Abril de 1861, 10 de Diciembre de 1862 y otras, declarando exentos de la ley de 25 de Junio, los terrenos comunes de los pueblos.

Sesto; que la inconstitucionalidad de la providencia por la cual se hizo la adjudicacion de los terrenos de que se trata, se hace mas notoria, porque la mayor parte de ellos está reducida á propiedad particular, pues de autos aparece que los vecinos tienen dichos terrenos, tierras de labor, ranchos, potreros cercados y acotados, casas, etc, permaneciendo solo con el caracter de comun ó proindiviso, los montes, los egidos y las aguas corrientes, es decir: lo que está expresamente exceptuado de la desamortizacion por ser de uso público, art. 8º de la ley de 25 de Junio y suprema resolucion de 20 de Agosto de 1856). En virtud de lo expuesto y con fundamento de los artículos 101, frac. 1ª y 102 de la Constitucion general, se decreta: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Juan José Quiroz, y demás vecinos de San Lorenzo Ixtacoyotla, contra la providencia del subprefecto, en virtud de la cual adjudicó al C. Ciriaco Hernandez, los terrenos de que se ha hecho mencion, por atacar dicha providencia la garantía que otorga el art. 27 del código fundamental.

Hágase saber: publíquese, compúlsense las copias respectivas para el "Semanario Judicial de la federacion" y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo sentenció y firmó el C. Lic. Felix Vergara Lope, tercer suplente del juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo; doy fé.—*F. Vergara Lope.*—*Francisco Briseño*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo que en 5 de Octubre del año próximo anterior promovió ante el juez de Distrito del Estado de Hidalgo, el C. Juan José Quiroz por sí y prestando voz y caucion por los vecinos de la municipalidad de San Lorenzo Ixtacoyotla, contra la adjudicación que en 12 de Setiembre de 1857 hizo el subprefecto de Metztitlan en nombre del ayuntamiento de esta municipalidad de San Lorenzo al C. Ciriaco Hernandez, de los terrenos llamados: Mesa del Aguila, Cuatlachapa, Ocotenango, Tepalcatipa, Calabozo, Frontera de Chihuahua y Tejacatla, alegando el promovente: que teniendo él y sus representantes pleno dominio y propiedad en esos terrenos por haberlos comprado sus antecesores el año de 1713 al juez privativo de composiciones de tierras y haberse poseído siempre libres de todo gravámen, no eran de repartimiento ó de los propios de la municipalidad de San Lorenzo Ixtacoyotla, sino de los naturales vecinos de ella y la adjudicación hecha por el subprefecto de Metztitlan á Hernandez, ha violado las garantías que á aquellos vecinos otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución de la república. Visto el informe rendido por el presidente municipal de San Lorenzo Ixtacoyotla, autoridad señalada por el quejoso como inmediatamente ejecutora del acto reclamado; las pruebas producidas; lo pedido por el promotor fiscal; lo alegado por el C. Quiroz y la sentencia del juez de Distrito.

Considerando:

Primero; que segun lo alegado y probado en el presente juicio, de los terrenos á que se refiere el C. Juan José Quiroz, unos están divididos de hecho entre los vecinos de los pueblos de la municipalidad de San Lorenzo Ixtacoyotla, y los que no lo estén, deben dividirse practicando en ambos casos

las disposiciones relativas de las leyes de desamortización y decidiéndose conforme á ellas en los juicios correspondientes; las cuestiones que pueda ocasionar la adjudicación.

Segundo; que los mencionados terrenos adjudicados al C. Ciriaco Hernandez por la subprefectura de Metztitlan, como propios de la municipalidad de San Lorenzo Ixtacoyotla, no han tenido ese carácter, pues las constancias que obran en estas actuaciones los presentan en calidad de comunales ó comunales de los naturales vecinos, poseídos por ellos á título de dominio.

Tercero; que en mérito de las consideraciones precedentes, la adjudicación de aquellos terrenos hecha al C. Hernandez en 12 de Setiembre de 1857, por el subprefecto citado en representación del ayuntamiento de la municipalidad de San Lorenzo referida constituye una violación en los derechos del quejoso Quiroz y de los naturales de los pueblos por quienes se queja, vulnerando las garantías individuales que ha invocado al solicitar al amparo y protección de la justicia nacional. Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: es de confirmarse y se confirma la sentencia que en 13 del corriente mes pronunció el juez 3º suplente de Distrito del Estado de Hidalgo, declarándose: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Juan José Quiroz y demas vecinos de San Lorenzo Ixtacoyotla contra la providencia del subprefecto, en virtud de la cual adjudicó al C. Ciriaco Hernandez los terrenos de que se ha hecho mencion, por atacar dicha providencia las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 del código fundamental.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que for-

maron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo veinte de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

De garantías promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México por D. Luis Desdier, por sí y en representación de D. Pedro Burgiard, contra la resolución de 28 de Agosto último dictada por el C. ministro de hacienda, en que se declaran expeditos los derechos de la Sociedad Asturiana de Beneficencia para reclamar el capital de treinta mil pesos y sus réditos, que reconocen las casas números 5, 6 y 7 de la 2ª calle de San Lorenzo y 17 y 18 de la Misericordia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor fiscal dice: que D. Luis Desdier por sí y en representación de D. Pedro Burgiard, se ha presentado al juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que la resolución del supremo gobierno de 28 de Agosto último, inserta en el "Diario Oficial" en que declara, que la Sociedad Asturiana de Beneficencia tiene expeditos sus derechos para exigir el capital de treinta mil pesos y sus réditos de un capital que se reconocía en las casas números 5, 6 y 7 de la 2ª calle de San Lorenzo y 9 y 10 de la Espalda de la Misericordia á la archicofradía, viola en sus personas las garantías concedidas por los artículos 14 y 27 de la Constitución. Al escrito en que hace una larga historia de la imposición y de la

archicofradía, acompaña copias de una carta que le fué dirigida por D. E. de Wagner; la de la escritura de cesión que del referido capital hizo el C. Ministro de justicia á instrucción pública, á favor de D. Pedro Burgiard y D. Luis Desdier, y la de la sentencia pronunciada por el C. juez, Vicente Dardon, declarando buenos los derechos de los citados al capital referido, y que debían rematarse á su favor las fincas hipotecadas. Pedido el informe al C. Ministro de hacienda lo ha evacuado insertando el de la mesa respectiva, en el que demuestra que no han sido violados los artículos 14 y 27 de la Constitución en el acto que se reclama. Para que los quejosos conozcan el informe y el juicio se siga por todos sus trámites, conforme se ha solicitado, puede el juzgado mandar se reciba á prueba por el término de la ley.

México, Octubre siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Herrera Campos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Febrero nueve de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el Sr. D. Luis Desdier por sí y en representación del Sr. D. Pedro Burgiard, contra una resolución del ministerio de hacienda fecha 28 de Agosto último, en virtud de reputar violadas en sus personas las garantías individuales que otorga en los artículos 14 y 27 la Constitución federal; visto el informe producido por el ministerio de hacienda; lo pedido por el ministerio fiscal; las pruebas rendidas y alegato del quejoso y visto en fin lo que de autos consta y tener presente convino: atendiendo á que la violación de las garantías que el quejoso invoca se deriva de que habiendo efectuado y consumado con total arreglo á las leyes vigentes y á la resolución del supremo gobierno investido de facultades extraordinarias, fecha 18 de Agosto de 1862,